

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

Demandante	ROGER EDWIN RESTREPO RESTREPO
Demandados	A.R.L. LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA Litisconsortes necesarios por pasiva: PALMACOOP S. A. S. y ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES DEL LLANO S. A. S.
Tipo de proceso	Ordinario
Radicado	05-001-31-05-008-2021-00224-02
Instancia	Segunda
Providencia	Interlocutorio Nro. 42 de 2022
Tema y subtema	Nulidad por indebida representación no se desvirtúa la capacidad de ejercicio
Decisión	Revoca

Medellín, diecinueve (19) de julio de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza y como ponente Luz Amparo Gómez Aristizábal, entra a resolver el recursos de apelación interpuesto por la apoderada judicial del demandante, contra el auto del 9 de mayo de 2022, proferido por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario promovido por **Roger Edwin Restrepo Restrepo** en contra de **A.R.L. La Equidad Seguros de Vida, Palmacoop S. A. S. y Asociación de Emprendedores del Llano S. A. S.**, radicado número 05001 3105 **008 2021 00224 01**.

Antecedentes

Para lo que interesa a esta instancia, se tiene que la autoridad judicial mediante providencia del 24 de febrero del año en curso señala:

"En el proceso de la referencia, pese a que se encontraba programada fecha para llevar a cabo la audiencia establecida en el artículo 11 de la ley 1149 de 2007, esto es, la AUDIENCIA OBLIGATORIA DE CONCILIACIÓN, DECISIÓN DE EXCEPCIONES PREVIAS, SANEAMIENTO, FIJACIÓN DE LITIGIO, la misma no se pudo realizarse en el día de hoy, por cuanto se avista una posible nulidad por indebida representación contemplada en el numeral 4 del artículo 133 del C.G.P., por lo que se corre traslado por TRES (3) días a las partes para lo que se estime pertinente, de conformidad con lo establecido en el artículo 137 ibídem."

Pronunciándose frente al traslado anterior, la apoderada del demandante expuso:

“

- El señor ROGER EDWIN RESTREPO RESTREPO como consecuencia del accidente laboral sufrido el 24 de junio del año 2015 presenta actualmente presenta diagnóstico de "TEC severo en el 2015 (accidente de tránsito, quedo con esquiria en lóbulo temporal izquierdo) y secuelas neuropsiquiátricas pos TEC (Conductas disruptivas, dependiente para ABC básico y avanzado)".

- A consecuencia de dicha condición de salud se encuentra hospitalizado (institucionalizado por autorización de la EPS) en el Hospital Mental de Antioquia desde el 11-04-2019; donde se le sigue un tratamiento y cuidado clínico constante de acuerdo a los requerimientos de sus patologías.

- Como se puso en conocimiento del despacho desde la presentación de la demanda; a mi mandante le fue reconocida su pensión de invalidez de origen profesional como mecanismo transitorio de protección de sus derechos fundamentales; imponiendo para mi representado la carga de iniciar el proceso ordinario laboral dentro de los 4 meses siguientes a la emisión del fallo de tutela.

- En consecuencia, el demandante y su grupo familiar, acudió a los servicios profesionales de la suscrita con el ánimo e intención exclusiva de defender y hacer efectivo los derechos que le asisten, así como dar cumplimiento a la carga procesal impuesta en el fallo de tutela que salvaguardo temporalmente sus derechos fundamentales.

- Es así, que pese a la condición de salud de demandante debidamente certificada ante el despacho; amparados el tenor del art. 6to de la ley 1996 de 2019, el cual establece:

"ARTÍCULO 6º. Presunción de capacidad. Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usar o no apoyos para la realización de actos jurídicos.

En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona.

La presunción aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral."

*Y con previa autorización del médico tratante, **y constancia debidamente expedida por el centro hospitalario** en el cual está institucionalizado el señor ROGER EDWIN RESTREPO, se procedió con el otorgamiento del poder para representar los intereses del demandante dentro del presente proceso; el cual cuenta con presentación personal ante notario público, quien previo a realizar la respectiva diligencia, verificó las condiciones reales del otorgante en dicho momento, así como la presentación del respectivo certificado médico donde se corroboró las facultades del mismo para suscribir el mandato; es preciso advertir, que dicha certificación fue allegada como anexo al poder con la presentación de la demanda y se remite nuevamente con el presente escrito.*

En este sentido, me permito dar alcance al traslado corrido por el despacho, evidenciándose que mi representado se encontraba legal y medicamente facultado para conferir el poder otorgado, sin que se configure ningún vicio que pueda invalidar lo actuado hasta el momento."

Luego de fenecer el término legal del traslado, y sin ninguna otra manifestación de los demás sujetos procesales, el juzgado de conocimiento, en proveído del 9 de mayo del año en curso **declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda por indebida representación del demandante**, y ordenó devolver la demanda a la parte actora para que en el término de cinco (5) días hábiles procediera a subsanar el requisito exigido, es decir, para que otorgara nuevo poder por la persona que represente debidamente el interés del señor Roger Edwin Restrepo Restrepo.

Para soportar su decisión a la letra indicó:

"Ahora bien, para resolver se debe indicar que este trámite de nulidad se inicia a partir de la evidencia documental aportada con la demanda, misma que da cuenta del diagnóstico clínico del demandante, quien por demás tiene una Pérdida de Capacidad para Laborar del 94,5%, según dictamen emitido por la ARL La Equidad Seguros de Vida, del que se desprende que luego de realizarle al demandante el examen físico arrojó lo siguiente: " Disartria, lenguaje incoherente por periodos de tiempo, afecto llano, desorientado en persona, tiempo y lugar. Conducta motora

inhibida, no se moviliza por sí mismo, lo deben arrastrar, memoria alterada, disprosexico, juicio y raciocinio comprometidos, introspección y prospección ausentes (folios 24 del archivo (1) del expediente digital). En ese mismo dictamen se indica que el demandante, requiere de terceras personas para la toma de decisiones folios 22 del archivo uno (1) del expediente digital).

Debe advertirse que la situación médica del demandante tiene como respaldo un diagnóstico médico, emitido por La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, entidad que en el acápite de Diagnóstico y Origen consignó que el demandante padece un Trastorno Mental no especificado debido a lesión y disfunción cerebral y a enfermedad física (folios 35 archivo uno (1) del expediente digital). También en el archivo 20 del expediente digital obra certificación del Médico Neurólogo Clínico, quien respecto al diagnóstico del demandante indica que tiene secuelas neuropsiquiátricas y epilepsia post traumática, con discapacidad cognitiva severa, que depende completamente de sus cuidadores, no apto para laborar ni administrar recursos y con pronóstico de recuperación malo. "

Bajo esta circunstancia, el Juzgado atendiendo al mandato de los poderes directivos que otorgan al Juez los artículos 48 del código. procesal del trabajo y 42 del Código General del Proceso, en su numeral 12, los cuales se refieren al Juez como director del proceso y le confieren la facultad de realizar el control de legalidad de las actuaciones procesales, respectivamente, procede a decretar la Nulidad de lo actuado como se indicó, la parte demandante insiste en que el proceso no adolece de ninguna nulidad acudiendo a la presunción de capacidad consagrada en el artículo 6° de la Ley 1996 de 2019. Esta solicitud se encuentra respaldada además por una certificación que sorprende al Juzgado, con la que la señora, Lina María Sánchez Gómez, quien, en calidad de Trabajadora Social de la ESE Hospital Mental del Antioquia, indica que el demandante goza de facultades para la firma de documentos legales que garanticen procesos en pro de su bienestar.

El Despacho para resolver advierte que, tal como lo dispone el artículo 6° de la Ley 1996 de 2019, la capacidad se presume, pero en este caso esa presunción está desvirtuada con los Dictámenes de Pérdida de Capacidad para laborar del demandante y por los diagnósticos de las patologías que padece, las que le generan una discapacidad severa, ya que se concluye que no se puede dar a entender ni de manera verbal, ni por escrito, porque tiene unos baremos calificatorios de los que se puede pensar que el demandante no tiene autonomía para la toma de decisiones, y se insiste en que le sorprende al Juzgado la certificación que brinda la Trabajadora Social del HOMO, con la que se pretende restarle relevancia a la valoración médica realizada al demandante a través de dictámenes de pérdida de capacidad laboral, los cuales son realizados por Grupos Interdisciplinarios idóneos y con facultades para ello, no siendo posible que el criterio de una Trabajadora Social pueda superar las valoraciones clínicas realizadas por profesionales de la salud al señor Roger Edwin Restrepo como son la ARL La Equidad Seguros de Vida, por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y por el Médico Neurólogo Clínico, Luis Yilber Meza.

Por lo anterior, insiste el Despacho en que el demandante tiene una discapacidad tal, que le impide otorgar poder en debida forma a un profesional del derecho para que lo represente en este juicio.

Conforme a las disposiciones normativas que rigen para estos efectos, debe acudirse a lo dispuesto en el la Ley 1996 de 2019, "Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad", y concretamente para que se aplique el artículo 38 de citada ley, que se denomina: "Adjudicación de apoyos para la toma de decisiones promovida por persona distinta al titular del acto jurídico", para lo cual la parte demandante deberá acudir al proceso de Jurisdicción Voluntaria y que allí se designe ya sea provisional o definitivamente a quien sea el que le brinde el apoyo al demandante para la toma de esta decisión.

Ahora, ante la evidencia de la discapacidad del demandante y que dicha circunstancia no fue subsanada dentro del término del traslado, sino que más bien hubo oposición, es forzoso para el Despacho declarar la existencia de nulidad por indebida representación del demandante, esto conforme a lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 133 del CGP".

Inconforme con la anterior decisión la **apoderada judicial del demandante**, formuló el recurso de reposición y en subsidio apelación, reitera lo expuesto en el escrito por medio del cual dio respuesta al traslado inicial, y precisa que como bien lo refirió el despacho en su providencia, el demandante presenta "*Disartria, lenguaje incoherente por periodos de tiempo, afecto llano, desorientado en persona, tiempo y lugar*"; lo que hace que si bien el demandante presenta dicha condición en la gran mayoría de tiempo; también es cierto que su condición mental es intermitente, presentando momentos de lucidez y en los cuales goza de un lenguaje coherente donde se puede dar a entender verbalmente y en dicha condición fue otorgado el poder cuestionado por el despacho; **de ello da fe la autorización dada por el médico tratante, por la trabajadora social de la E.S.E. HOMO y la verificación previa que por ley y obligación debe hacer el notario antes de realizar la diligencia de presentación personal.**

Agrega que se cumplen los presupuestos establecidos por la Ley 1996 de 2019, frente a respetar las preferencias o decisiones del discapacitado, cuando se pueda dar a entender por cualquier medio; pensar lo contrario sería transgredir no solo una norma sustancial

concreta y especial, sino que devendría en la vulneración flagrante de sus derechos fundamentales, que a más de padecer su condición de discapacidad, se le restringirían el acceso y disfrute de sus derechos por su mera condición; aún más grave se le estaría limitando el acceso a la administración de justicia, cuando es de conocimiento del despacho, que la presentación **oportuna** (dentro de los 4 meses posteriores al fallo de tutela), de esta demanda obedeció a la protección transitoria otorgada en la acción constitucional y a la necesidad de que el amparo otorgado mediante la misma siguiera teniendo efectividad mientras un juez natural decidiera de fondo su derecho, sin que se le pueda dejar supeditado su acceso a la administración de justicia, como lo pretende el despacho, hasta que se haga un trámite judicial de asignación de apoyos que por reglas de la experiencia, se conoce que es un proceso demorado y engorroso, que ni el actor, ni su grupo familiar estuvieron en las condiciones físicas y económicas para llevarlo a cabo antes instaurar esta acción.

Seguidamente cita apartes del artículo 13 de la "Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, y aprobada mediante Ley 1346 de julio 31 de 2009, respecto al acceso a la administración de justicia para los discapacitados, igualmente cita la providencia STC16392-2019 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que examinó la Ley 1996 de 2019, advirtiendo que, a partir de la entrada en vigor de aquel estatuto, *ninguna persona mayor de edad podrá perder su capacidad legal de ejercicio por el hecho de contar con una discapacidad, manteniéndose dicha medida únicamente respecto a las personas que, con anterioridad, por fallo judicial, hubieran sido declarados incapaces*, y precisa que para el nuevo modelo de discapacidad que introduce la norma en comento, aquella no es una enfermedad, no se equipara a un

diagnóstico médico, ya la voz de los profesionales de la salud, no es la autorizada como sucedía en el paradigma anterior donde inclusive el Derecho les daba la última palabra, por el contrario, el prototipo actual reconoce la autonomía de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de su vida, de manera que puedan tomar sus propias decisiones y materializar sus proyectos de vida. Con este fin, se busca eliminar todo tipo de barreras físicas, sociales, actitudinales y jurídicas que se han ido construyendo históricamente y que vulneran los derechos de esta población.

La A quo mantuvo su posición, señalando, respecto al recurso del demandante, que si bien tal como lo dispone el artículo 6° de la Ley 1996 de 2019, la capacidad se presume, en este caso esa presunción estaba desvirtuada con los Dictámenes de Pérdida de Capacidad para laborar y por los diagnósticos de las patologías que padece, no siendo posible para el Juzgado que la certificación que brinda la Trabajadora Social del HOMO, pretenda restarle relevancia a la valoración médica a través de dictámenes de pérdida de capacidad laboral, los cuales son elaborados por Grupos Interdisciplinarios idóneos y con facultades para ello. Agregando además que la certificación que avaló la capacidad del demandante para otorgar poder provino de la Trabajadora Social (ver archivos 20 y 24 del expediente digital), pues en momento alguno se aportó certificación por parte del médico tratante tal como lo indicó la apoderada de la parte actora.

Por encontrarse debidamente sustentado y presentado en tiempo el recurso de alzada, procedió a concederlo ante esta Corporación.

Para mejor proveer esta Corporación en proveído del 8 de julio del año en curso se ordenó *“librar oficio a la E.S.E HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA-*

HOMO-, para que el médico tratante, informe si el paciente ROGER EDWIN RESTREPO..., goza de facultades mentales para la toma de decisiones referentes a suscribir documentos legales que garanticen procesos en pro de su bienestar, e igualmente, reporte su estado actual de su salud, y aporte su historia clínica.”

El pasado 12 del mes y año que corre, posterior al decreto de la prueba referida, el juzgado de conocimiento remitió a este despacho providencia emitida por el Juzgado Séptimo de Familia en el que admitió la demanda de Adjudicación de Apoyos e igualmente concedió MEDIDA CAUTELAR consistente en: *designar como persona de **Apoyo Judicial Provisional** del señor ROGER EDWIN RESTREPO RESTREPO, a su hermano, el señor WILDEMAN FERNANDO RESTREPO RESTREPO identificado con C.C Nro. 71.384.142, con el fin de que se otorgue un nuevo poder para representar los intereses de ROGER EDWIN, dentro del proceso ordinario laboral con radicado 05001310500820210022400, el cual se viene adelantando en el juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín donde se pretende el reconocimiento definitivo de la pensión de invalidez de origen profesional, junto con el retroactivo pensional, intereses moratorios y costas del proceso.*

Atendiendo a lo anterior, el 13 del mismo mes, igualmente la parte accionante, allega a esta Corporación la misma información remitida por el juzgado de conocimiento, anexado el poder conferido por el **Apoyo Judicial Provisional** del señor Roger Edwin Restrepo Restrepo, su hermano, Wildeman Fernando Restrepo Restrepo a la Dra. Jessica Catherine Orrego Zuluaga para representar los intereses de Roger Edwin, dentro del presente proceso ordinario laboral, y memorial en el que indica:

“

*En este entendido, se logra acreditar que se han desplegado las actuaciones judiciales y extrajudiciales pertinentes tendiente a la consecución judicial de un apoyo para el demandante, **en aras de garantizar su capacidad y debida***

representación dentro de la presente litis, así como el disfrute y acceso efectivo de sus derechos. Reiterando de esta manera la respetuosa solicitud frente a que se reponga el auto recurrido y en su lugar se adopten las medidas de saneamiento que a su justo juicio tenga el despacho, ordenando continuar con el trámite normal del proceso sin afectar las actuaciones que hasta ahora se han surtido.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones

Ante la inconformidad de la recurrente, habrá de establecerse si es procedente declarar la nulidad por indebida representación del actor al no estar en capacidad mental de otorgar poder judicial para impetrar la acción, como lo consideró la juez de la causa, o si, por el contrario, su capacidad se presume y el mandato se concedió siguiendo los lineamientos legales como lo asevera la recurrente.

Pues bien, preceptúa el **artículo 54 del Código General del Proceso**, que quienes puedan disponer de sus derechos tienen capacidad para comparecer por sí mismos al proceso y las demás personas deberán comparecer por intermedio de sus representantes o debidamente autorizadas por éstos, con sujeción a las normas sustanciales.

Por su parte, el **artículo 1503 del Código Civil**, establece que ***"...toda persona es legalmente capaz, excepto aquéllas que la ley declara incapaces..."***; partiéndose de la presunción legal de que toda persona es capaz y que solo en aquellos casos expresamente señalados, es incapaz para asumir responsabilidades o para ejercer derechos.

Sobre este tema, la jurisprudencia constitucional en sentencia C-025 de 2021, refiriéndose a la presunción de capacidad legal de las personas en situación de discapacidad mental razonó:

"78. El modelo social de discapacidad, incorporado al ordenamiento constitucional interno a través de la Ley 1346 de 2009 la cual aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, exige derogar todos aquellos mecanismos legales que sustituyen la capacidad legal de las personas en condiciones de discapacidad. En cumplimiento de este mandato, el Congreso de la República expidió la Ley 1996 de 2019, la cual regula un sistema de toma de decisiones con apoyos y salvaguardias a favor de las personas con discapacidad. Entre otros, deroga la discapacidad mental o intelectual como una incapacidad absoluta del Código Civil. Ahora, a través de un sistema de apoyos y asistencia independiente e interdependiente, las personas con discapacidad pueden ejercer su capacidad legal en igualdad de condiciones. Dado que para la existencia y validez de un acto jurídico se requiere de la capacidad legal y la voluntad de la persona titular, aquellas personas que se encuentren absolutamente imposibilitadas para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio, modo y formato de comunicación posible, tendrán que actuar bajo una sentencia de adjudicación judicial de apoyos, con las asistencias y respaldos que allí se especifiquen (acorde con los artículos 38 y 39 de la Ley 1996 de 2019), incluso la representación de una tercera persona asignada por el juez (conforme el artículo 48 de la Ley 1996)."

Igualmente, la **Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, en providencia SC 4751 del 31 de octubre de 2018,** precisó que **en principio, se presumen legalmente válidos los actos o contratos celebrados por el discapacitado absoluto no interdicto; presunción que admite prueba en contrario, demostrando que aquel se encontraba en situación de discapacidad absoluta,** aclarando que no toda enfermedad mental conduce a la nulidad de un acto o contrato, **quien la alega debe orientar su actividad probatoria a acreditar que para 'entonces' el contratante padecía de una grave anomalía psíquica y que esa afección influyó en la libre determinación de la voluntad.**

A su vez, La Ley 1996 de 2019 de 26 de agosto 2019, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de

las personas con discapacidad mayores de edad en su artículo 6º dispone:

"PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD. Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos.

En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona.

La presunción aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral.

PARÁGRAFO. El reconocimiento de la capacidad legal plena previsto en el presente artículo aplicará, para las personas bajo medidas de interdicción o inhabilitación anteriores a la promulgación de la presente ley, una vez se hayan surtido los trámites señalados en el artículo 56 de la misma."

Frente a esta normatividad, en sede de tutela, la Corte Suprema de Justicia en su Sala Civil, en providencia STC16392 de 2019 expuso:

"4.3. No obstante, la nueva Ley 1996 de 2019 (por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad) prefirió el antedicho modelo social, a partir de los imperativos constitucionales y legales de protección e inclusión social de las personas mayores con discapacidad mental, según los cuales éstas no deben ser tratadas como pacientes sino como verdaderos ciudadanos y sujetos de derechos, que requieren no que se les sustituya o anule en la toma de sus decisiones, sino que se les apoye para ello, **dando prelación a su autodeterminación, dejando de lado el obstáculo señalado con antelación que, partiendo de apreciaciones de su capacidad mental, les restringía el uso de su capacidad legal plena.**

(...)

Bajo esta novedosa ruta en el ámbito patrio, atendiendo a la reforma introducida, especialmente la variación hecha al artículo 1504 del Código Civil¹, la presunción de capacidad fijada en el precepto 1503 ibidem

¹ El texto de la norma, antes de la modificación introducida con el precepto 57 de la Ley 1996 de 2019, señalaba: «ARTICULO 1504. **Son absolutamente incapaces las personas con discapacidad mental**, los impúberes y sordomudos, que no pueden darse a entender por escrito.

Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales, y no admiten caución.

*actualmente incluye a los individuos mayores de edad con discapacidad, último canon que enseña que «**toda persona es legalmente capaz, excepto aquéllas que la ley declara incapaces**»; con ocasión de ello surge pertinente recordar que desde antaño se ha entendido tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, que «**la capacidad es la regla general y la incapacidad su excepción**», de donde la nueva reglamentación no impone cosa diferente a que, en pro de la autodeterminación de dichos sujetos, debe presumirse su capacidad de goce y de ejercicio.*

Esta Corporación, frente a la presunción de capacidad de las personas, ha dicho que:

...la capacidad, en sentido general, consiste en la facultad que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. De acuerdo con el artículo 1502 de la ley sustantiva civil esa capacidad puede ser de goce o de ejercicio.

La primera hace referencia a la idoneidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, de la cual gozan todas las personas, por lo cual se erige como uno de los atributos de la personalidad jurídica; al paso que la segunda consiste en la habilidad que la ley les reconoce para ejercer por sí mismas los derechos de que son titulares y cumplir con sus obligaciones, sin necesidad de la autorización o mediación de otras.

***Por lo tanto, la capacidad es la regla general y por ello, todo individuo tiene capacidad de goce; en cuanto a la capacidad de ejercicio, requisito para la validez de una declaración de voluntad, en principio, también la tienen todas las personas, salvo aquellas a las que la ley declare incapaces,** según lo previene el artículo 1503 del Estatuto Civil (CSJ STC14592-2015, 22 oct. 2015, rad, 2015-02426-00).*

(...)

4.4. Así, la referida Ley 1996 de 2019 constituye un notable avance legislativo en el ámbito patrio respecto a las personas mayores de edad con discapacidad, al optar por el aludido modelo regulatorio social, edificado en la presunción general de capacidad, rompiendo el paradigma en punto a confundir su capacidad legal con la intelectual para reconocerlas como sujetos plenos, con potencialidades y un proyecto de vida personal que pueden desarrollar, entendiendo que están facultadas para decidir autónomamente, entre otros aspectos, sobre sus negocios jurídicos, situaciones médicas, personales y familiares que las afecten.

***Son también incapaces** los menores adultos que no han obtenido habilitación de edad y **los disipadores que se hallen bajo interdicción**. Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes.*

Además de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos» (se destacó).

El **nuevo texto**, según el referido canon 57 de la Ley 1996 de 2019, es el siguiente:

«Artículo 1504. Incapacidad absoluta y relativa. Son absolutamente incapaces los impúberes. Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales, y no admiten caución. Son también incapaces los menores púberes. Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. Además de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos».

Ahora en lo que respecta a las nulidades procesales, para lo que aquí interesa se tiene que el artículo 133 del CGP en su numeral 4 dispone:

"ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

(...)

4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.

A su turno el artículo 136 del mismo estatuto señala:

SANEAMIENTO DE LA NULIDAD. *La nulidad se considerará saneada en los siguientes casos:*

4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa.

Y seguidamente, el 138 frente a los efectos determina:

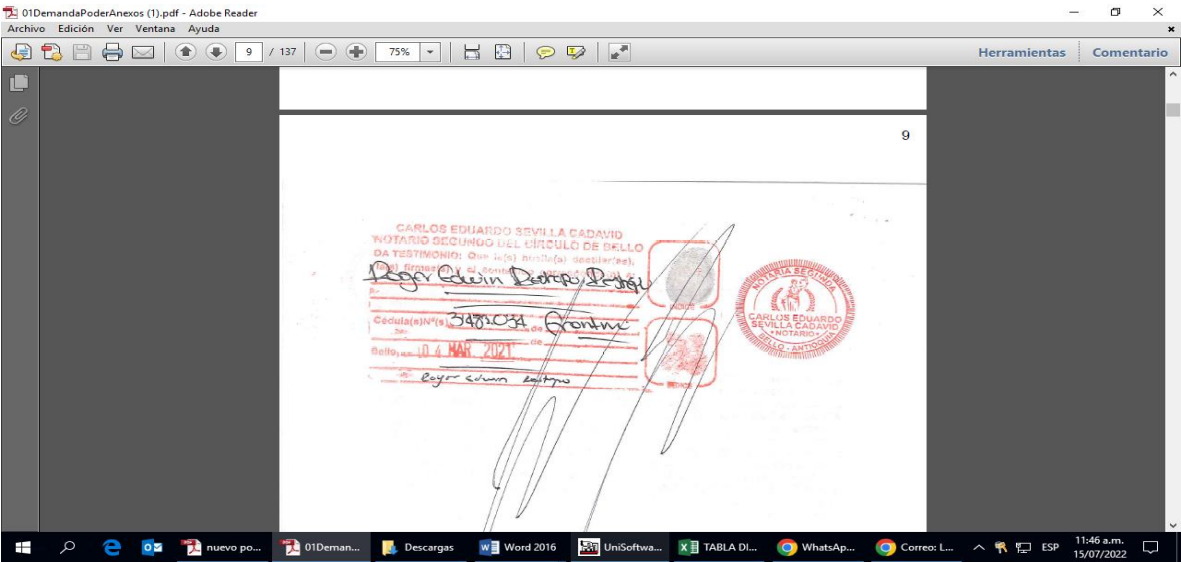
EFFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN O COMPETENCIA Y DE LA NULIDAD DECLARADA.

(...)

*La nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo **y que resulte afectada por este. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla,** y se mantendrán las medidas cautelares practicadas.*

Teniendo en cuenta lo anterior, descendiendo al caso concreto, si bien es cierto, no desconoce la Sala, que mediante Dictamen No. 389696 **del 31 de octubre de 2017** el grupo interdisciplinario de la Compañía Equidad Seguros de Vida ARL determinó que el actor tiene una pérdida de capacidad laboral del 94.5% "*Disartria, lenguaje incoherente por periodos de tiempo, afecto llano, desorientado en persona, tiempo y lugar. Conducta motora inhibida, no se moviliza por sí mismo, lo deben arrastrar, memoria alterada, disproporción, juicio y raciocinio comprometidos, introspección y prospección ausentes (folios 24 del archivo (1) del expediente digital),* también lo es, que existe una presunción de capacidad, y que contrario a lo considerado por la juez de la causa, ésta

presunción para el momento del otorgamiento del poder judicial no fue desvirtuada, pues como se indicó los documentos médicos datan de fechas anteriores a la emisión del mandato, y se aprecia no solo el certificado de la trabajadora social del Hospital Mental que da fe de la capacidad del actor para firmar, sino que además el poder judicial otorgado el 4 de marzo del año 2021 está debidamente autenticado ante el Dr. Carlos Eduardo Sevilla Cadavid, Notario Segundo del Circulo de Bello, quien por disposición legal da fe del trámite realizado.



luego, bajo los principios del Estado Social de Derecho, lo constitucionalmente procedente como juez director del proceso, con las facultades que la ley le provee², era cerciorarse **de las condiciones médicas del actor para el momento del otorgamiento del poder judicial**, y no de tajo decretar una nulidad, pues además de los documentos antes referidos no podía perder de vista, que: i) el proceso ya se encontraba en una etapa avanzada luego de haberse integrado la pasiva y los demandados haber contestado sin hacer manifestación alguna frente a la aludida indebida representación planteada; ii) **el**

² Artículo 48 C.P.T y de la S.S.” El juez asumirá la dirección del proceso adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite.”

juzgado omitió oportunamente realizar el control previo de legalidad al admitir la demanda el 17 de junio del año 2021 y pretendió que en un plazo mínimo (5 días) se saneara la posible situación anómala con la demanda de Adjudicación de Apoyos, cuando es sabido que el trámite de un proceso judicial y los términos no depende del interesado sino de la propia administración de justicia; y lo más importante, iii) **se está ante un sujeto de especial protección constitucional**³ que pretende obtener pensión de invalidez, frente al cual se requiere de acciones positivas por parte del Estado para lograr su real amparo, sin olvidar que tanto **la Constitución Política (Art. 228) como las demás normas procesales (Art. 11 CGP) hacen prevalecer el derecho sustancial sobre las formas, con miras a salvaguardar derechos fundamentales**, máxime cuando se trata de derechos laborales y de la seguridad social, siendo el criterio jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que por la especial naturaleza del derecho laboral “...cuando en su ámbito se despliega la seguridad social, **obliga al juez a actuar para superar las deficiencias probatorias o de gestión judicial**”⁴

Luego no podía aseverarse que se demostró la indebida representación para el momento del otorgamiento del poder, pues no se desvirtuó la presunción de capacidad de ejercicio del

³ Ver al respecto sentencia T-575-2017 “El Estado Colombiano debe, a través de todos sus estamentos, garantizar a todas las personas el efectivo goce de sus derechos constitucionales. En desarrollo de dicho mandato, la protección que debe brindarse a las personas en condición de discapacidad debe ser integral, en el entendido de que, tratándose de un grupo poblacional tradicionalmente discriminado y marginado, corresponde a todas las ramas del poder público, garantizar la igualdad plena de estas personas frente a todos los integrantes de la sociedad en cuanto al acceso a la educación, trabajo, salud, pensiones, libertades y demás prerrogativas que, en definitiva, les permita gozar de una vida digna, deber que además de estar contenido en la Constitución, también se encuentra consignado en diferentes instrumentos internacionales y normas jurídicas expedidas por el legislador.

⁴ Sentencia Rad. 30434 de 2008, reiterada en la SL 3461 de 2018.

poderdante, y en esa medida, no se encontraba probada la referida nulidad para ser declarada de tajo.

No obstante, si en gracia de discusión, se aceptase el vicio del acto procesal, se aprecia que éste ya se encuentra zanjado, saneado, según lo dispuesto en el auto del pasado 8 de julio proferido por el juzgado Séptimo de Familia por medio del cual se admite la demanda de Adjudicación de Apoyos y como medida cautelar se designa como persona de **Apoyo Judicial Provisional** del demandante a su hermano, el señor Wildeman Fernando Restrepo, **con el fin de que otorgue un nuevo poder para representar los intereses de Roger Edwin, dentro del presente proceso**, lo que igualmente se encuentra cumplido con el mandato que el primero otorga a la apoderada hoy recurrente para que continúe velando por los intereses de su hermano en esta Litis así:

”

Asunto: Otorgamiento de poder.

WILDEMAN FERNANDO RESTREPO RESTREPO, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de **Apoyo judicial provisional de mi hermano ROGER EDWIN RESTREPO RESTREPO**, identificado con la cédula número C.C. 3.483.034 mayor de edad, vecino y domiciliado en Medellín (Ant.), por medio del presente escrito le otorgo poder especial amplio y suficiente y a su vez ratifico el poder otorgado directamente por mi hermano con anterioridad a los Doctores **JESSICA CATHERINE ORREGO ZULUAGA y VICTOR MANUEL JIMENEZ GALLEG0** abogados inscritos y en ejercicio, identificados con la cédula de ciudadanía número 1.037.603.900 y 8.466.127 respectivamente y portadores de las tarjetas profesional número 244.878 del C.S.J. y 317.474 del C.S. de la J., para que representen los intereses de **ROGER EDWIN RESTREPO RESTREPO** dentro el proceso ordinario laboral con radicado único nacional 05001310500820200022400 que se adelanta en contra de la **A.R.L. SEGURO DE VIDA LA EQUIDAD** representada legalmente por el Dr. **CAROLINA MERCEDES GOENAGA GONZALEZ RUBIO** o por quien haga sus veces, **PALMACOOP S.A.S**, identificada con NIT 900435533-6, domiciliada en Bogotá D.C, representada legalmente por **LIDA ISDALIA CARDENAS PARRA**, o quien haga sus veces al momento de la notificación y a la **ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES DEL LLANO S.A.S**, identificada con NIT 900332106-8, domiciliada en Yopal, representada legalmente por **EDGAR GUTIERREZ BARRERA**, o quien haga sus veces; tendiente a obtener el reconocimiento de su **PENSIÓN DE INVALIDEZ DE ORIGEN PROFESIONAL, RETROACTIVO PENSIONAL**, intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993, la indexación de las sumas a que sea condenado y las costas judiciales.

Los apoderados cuentan con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial las de recibir, transigir, sustituir, desistir, conciliar, renunciar, reasumir, cobrar y ejecutar; así como todas aquellas que tiendan al buen cumplimiento de su gestión.

Las costas procesales y agencias en derecho serán en su totalidad para las abogadas, pues de esta forma lo pactamos las partes.

Los correos para notificación electrónica son: joz1004@hotmail.com y victorjimenez@hotmail.es.

Atentamente,


WILDEMAN FERNANDO RESTREPO RESTREPO
C.C. 71.384.142

Acepto,

JESSICA CATHERINE ORREGO ZULUAGA
C.C. 1.037.603.900
T.P. 244.878 del C.S. de la J.

VICTOR MANUEL JIMENEZ GALLEG0
C.C. 8.466.127
T.P. 317.474 del C.S. de la J.

”

Aunado a que en la realidad material del asunto especial aquí debatido el acto procesal objeto de reparo por parte de la juez, **ha cumplido su finalidad en cuanto a buscar que no sea nugatoria y sea real y definitiva la decisión constitucional como mecanismo transitorio que ordenó la pensión de invalidez para el señor Roger, sumado a que durante el trámite no se ha violado el derecho de defensa de la parte pasiva**, la cual por demás como se indicó en apartes anteriores, ha guardado silencio frente a este asunto, luego es claro que toda la actuación es válida y eficaz pues los demandados también han tenido oportunidad de controvertirla y no ha existido oposición al respecto.

En ese orden de ideas habrá de revocarse la decisión objeto de reparo, y en su lugar, atendiendo a lo dispuesto por la jurisdicción de familia, la juez de la causa deberá **aceptar** la designación como persona de **Apoyo Judicial Provisional** del señor Roger Edwin Restrepo Restrepo a su hermano, el señor Wildeman Fernando Restrepo Restrepo, y el nuevo poder otorgado por este último a la apoderada que ya viene actuando en representación de éste, y **continuar con el trámite del proceso, esto es, programar fecha con el objeto de llevar a cabo la audiencia establecida en el artículo 11 de la ley 1149 de 2007.**

En mérito de lo expuesto, la **Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,**

Resuelve

Primero: REVOCAR el auto de fecha, naturaleza y procedencia conocidas, para en su lugar, ordenar a la juez de la causa que proceda

a aceptar: i) la designación como persona de **Apoyo Judicial Provisional** del señor Roger Edwin Restrepo Restrepo a su hermano, el señor Wildeman Fernando Restrepo Restrepo, **ii)** el nuevo poder otorgado por este último a la apoderada que ya viene actuando, y **iii)** a **continuar con el trámite del proceso, esto es, programar fecha con el objeto de llevar a cabo la audiencia establecida en el artículo 11 de la ley 1149 de 2007.**

Sin costas por no haberse causado, art. 365 – 8 del C.G. del P..

Lo resuelto se notifica a las partes por **estados virtuales**, en virtud de lo dispuesto en artículo 295 C.G. del P, en concordancia con el artículo 9 de la Ley 2213 de 2022.

Los magistrados, (firmas escaneadas)


LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL
Magistrada


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por
estados No. 130 del 27 de julio de 2022
consultable aquí:
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>